

MOVIMIENTO OBRERO Y CAMBIO POLÍTICO EN ESPAÑA (1956-1977)

XAVIER DOMÈNECH SAMPERE
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

El declive de la historia del movimiento obrero en las agendas investigadoras coincide con su sorprendente resistencia a fenecer en las afinidades electivas de los jóvenes investigadores, la apertura de nuevas vías de investigación y una cierta explosión de estudios sobre otros movimientos sociales que tienen también un marcado carácter de clase en sus orígenes.¹ Y es que, a pesar del progresivo decrecimiento de las investigaciones académicas acabadas dedicadas al movimiento social por antonomasia, lo cierto es que su historia sigue siendo clave para la comprensión de la dinámica política y social del tardofranquismo y los primeros años de la democracia. Lo es como mínimo en dos sentidos.

En el primero de ellos, a pesar de que la mayoría de monografías dedicadas al movimiento obrero en la historia de España las debemos a un periodo que va de finales de siglo XIX al primer tercio del siglo XX, lo cierto es que jamás hubo tantos trabajadores en la historia de este país como en los años sesenta y setenta del siglo pasado. Si los trabajadores industriales ocupaban un 24,7 % de la población activa en 1950, hacia el final del amplio proceso de transmutación económica y social de la sociedad española que se conoció bajo el nombre de *desarrollismo* estos incluían ya al 48,4 % de la población ocupada. Nunca la clase obrera

¹ Si se siguen, por ejemplo, las comunicaciones presentadas en los Encuentros de investigadores del Franquismo de 1999 a hoy, el declive de los aspectos relacionados con la historia del movimiento obrero, a pesar de no tener la relevancia que mantuvieron en las primeras ediciones de estos encuentros, puede ser vista de otra manera. Así, por ejemplo, en el IV Encuentro de Valencia (1999) las temáticas de esta índole ocupan 26 comunicaciones, solo superadas por las que versaban de Ideología, cultura y medios de comunicación; en el V Encuentro celebrado en Albacete (2003), de las 115 comunicaciones presentadas 28 se podrían adscribir a la temática obrera; y en el VI de Zaragoza 13 de las 75 comunicaciones mantienen esta temática como objeto de aproximación. De hecho, a pesar de que de 2003 a 2006 se podría apreciar un decrecimiento en las comunicaciones sobre la clase y el movimiento obrero, lo cierto es que entremedias, en unos años especialmente proliferos en congresos sobre el franquismo, para poner un solo ejemplo, incluso en un congreso específico sobre la transición celebrado en Barcelona el año 2005 (*La transición de la dictadura franquista a la democracia*) 23 de las 68 comunicaciones estaban relacionadas con esta temática.

había sido tan numerosa y es en sus actitudes y acciones donde se encuentra gran parte de la explicación de la dinámica política, social y cultural del periodo.

Pero si este solo es un aspecto cuantitativo de la realidad social española bajo el franquismo y los primeros años de la democracia, es también cierto que hacia el final de la Dictadura el movimiento obrero se había convertido en la principal preocupación del régimen, aquel sujeto social que había demostrado una mayor capacidad para desafiarlo y para producir la transformación de las condiciones de la acción política a la vez que mejoraba la vida de los más con sus prácticas.² En este marco, la historia del movimiento obrero, o la interpretación de su conflictividad, deviene ineludible en la historia del periodo, más allá del campo de la historia social, y en él mismo se ponen en juego las diversas explicaciones sobre el origen mismo del cambio político. Aquí propondremos una de ellas, según la cual el movimiento obrero fue clave en la generación de nuevas formas de acción política bajo la Dictadura que contribuyeron decisivamente a su final en una relación que como mínimo se desarrolló en tres etapas:

a) Una primera, donde emergió a lo largo de los años sesenta un nuevo movimiento obrero que, con su práctica, hizo inviable el régimen a largo plazo y que, en el corto, redefinió el ámbito de aquello que era posible hacer políticamente bajo el franquismo.

b) Una segunda, donde la relación entre movimientos sociales y cambio político se hizo directa, interactuando en un mismo *tempo* durante el primer periodo de la transición.

c) Y una tercera etapa donde la definición de las reglas de juego del cambio político produjeron una primera preinstitucionalización de los actores políticos, generando un nuevo marco donde los movimientos sociales transitaran de ser los sujetos principales de la oposición a la Dictadura, a una herramienta de presión en la negociación, para, finalmente, pasar de ser sujetos activos del cambio a receptores de sus consecuencias.

Dada la extensión de la que disponemos aquí, nos centraremos en los dos primeros momentos de esta relación, dejando de lado el último que, además, abre un nuevo ciclo de la historia del movimiento obrero

LA FORMACIÓN DE UN NUEVO MOVIMIENTO OBRERO

Con la instauración del régimen franquista, el movimiento obrero prácticamente desapareció como sujeto político y social. A la realidad de la represión inicial,

² Para la percepción del régimen sobre el movimiento obrero hacia el final de la Dictadura, Pere Ysàs, *Disidencia y subversión*, Crítica, Barcelona, 2004.

donde la mayoría de los activistas desaparecieron asesinados, presos o en el exilio, a la vez que la base social republicana vivía un amplio proceso de depuración, represión y clausura vivencial, se impuso, además, la creación de organizaciones de masas que buscaban el encuadramiento y control de la población y, en el caso que nos ocupa, especialmente de la clase obrera. El franquismo no venía solo en este sentido a erradicar el pasado, sino también a instituir el futuro, no solo a reprimir sino también a pervivir. No era este un tiempo especialmente propicio para las organizaciones obreras en este sentido. Pero a pesar de ello, y sorprendentemente si lo comparamos con otras realidades similares bajo dictaduras homólogas, fue este mismo movimiento obrero derrotado el que consiguió protagonizar la huelgas de Manresa en 1946, Vizcaya en 1947 o Barcelona en 1951,³ siendo ya desde prácticamente sus orígenes el único sujeto presente con capacidad para desafiar a la Dictadura. Explosión de conflictos aislados que dio paso durante el ciclo que va de 1956 a 1962 a un nuevo modelo de conflictividad por oleada. En este modelo la acción de un epicentro, usualmente caracterizado por una gran homogeneidad de clase en términos económicos, sociales y culturales que le permitía afrontar el inicio de las huelgas, concentraba los recursos represivos, normalmente en forma de decreto de estados de excepción en un territorio concreto, «liberando» de la presión policial al resto de las concentraciones de la clase que iniciaban círculos concéntricos de huelgas, saldadas con rápidos acuerdos de aumentos salariales como única forma de paralizar la extensión de la ola.

Finalmente, la necesidad de reprimir el control social de la situación por parte del gobierno llevaba al inicio de negociaciones con el epicentro huelguístico. En este modelo, con desigual suerte según los ciclos, tanto los centros de la clase, que devenían en sí mismos mitos movilizadores (el mito de Asturias se renovará en estos años en este sentido en el marco de las representaciones de la clase), como sus partes más externas conseguían de forma sincopada, dentro del marco del *tempo* concreto de la oleada, importantes aumentos salariales. Así si en la oleada de 1956 se consiguió, por primera vez, recuperar los niveles retributivos anteriores a la Guerra Civil, en 1962 se produjeron importantes aumentos salariales que permitieron paliar en parte los efectos del Plan de Estabilización de 1959 sobre las rentas obreras. De hecho, en este sentido, la oleada de 1962 fue la más extensa y completa de este modelo, con la movilización de entre 200.000 y 650.000 trabajadores según las fuentes,⁴ pero también la última en su género. En

³ Centro de Documentación de Historia Contemporánea del País Vasco, *La huelga general del 1 de mayo de 1947*, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1991; Libert Ferri, Jordi Muixí y Eduardo Sanjuán, *Las huelgas contra Franco (1939-1956)*, Barcelona, Planeta, 1978; Félix Fanés, *La vaga de tramvies del 1951*, Barcelona, Laia, 1977.

⁴ No hay datos oficiales para 1962, de hecho no se empezaron a computar hasta 1963, por este motivo cualquier estimación es aproximativa y se tiene que basar en las fuentes de la propia oposición,

efecto, cuando la misma se retiró lo que se produjo, en forma de reacción empresarial en parte precisamente contra las conquistas obreras anteriores, fue la extensión de un nuevo modelo de relaciones laborales basado en la nueva Ley de Convenios Colectivos de 1958. En este sentido, la progresiva implantación de los convenios a nivel de fábrica y sector permitió, conjuntamente con el decreto de salario mínimo de 1963 —que en la práctica rebajaba parte de las conquistas conseguidas al final de la ola de 1962— extender el trabajo a prima, ligando la retribución y los aumentos salariales al incremento de la productividad. Este nuevo modelo de relaciones laborales fragmentó las distintas realidades obreras que metabolizaron las nuevas realidades produciendo un tránsito hacia un nuevo tipo de movimiento obrero.⁵

Si en el modelo de conflictividad anterior, este iba de la ola general al conflicto particular, que se daba precisamente por la existencia de esta misma ola, ahora el conflicto particular, desarrollado primordialmente en las grandes empresas, que eran las que tenían un convenio propio y recursos suficientes para afrontar la conflictividad por sí solas, ya no se proyectaba en el espacio estatal, sino en las áreas de influencia locales. Pero esta transición en la morfología de la conflictividad obrera tardará en realidad aún unos años en madurar. En un primer momento, si bien esta nueva conflictividad en las grandes empresas recogía éxitos parciales, pronto mostraría cuáles eran sus principales puntos débiles. Su secuencia usualmente tenía los siguientes momentos: pequeños conflictos laborales de empresa/formación de una comisión obrera para negociar/éxitos parciales/ endurecimiento del conflicto/intentos, fracasados, de exteriorizar el conflicto fuera del ámbito de la empresa para conseguir solidaridad en forma de paros en otras empresas, manifestaciones y dinero para sostener el conflicto —la empresa decreta el despido colectivo de todos los trabajadores y plantea una readmisión indivi-

las cuales usualmente están sobrestimadas. Jordi Blanc (Manuel Castells), reproduciendo los datos de *Nuestra Bandera* (número 42-43, marzo-abril de 1965), da un total de 659.360 obreros participantes en las huelgas de 1962. Carme Molinero y Pere Ysàs, reducen esta estimación y la sitúan entre 200.000 y 400.000 obreros participantes. Vid. Jordi Blanc, «Las Huelgas en el movimiento obrero español», en *Horizonte español 1966*, Ediciones Ruedo Ibérico, 1966, pp. 249-274, cf. p. 274; Carme Molinero y Pere Ysàs, *Productores disciplinados y minorías subversivas*, Siglo XXI, Madrid, 1998, p. 143. Para una argumentación en el sentido de que en 1962, contrariamente a lo sucedido en otros casos, los datos de la oposición no solo no estaban sobrestimados sino que de hecho minusvaloraban la conflictividad real: Rubén Vega y Begoña Serrano, *El movimiento obrero en Gijón bajo el franquismo* (1937-1962), Ayuntamiento de Gijón, Gijón, 1998, pp. 227-228.

⁵ Aquí solo estamos abordando la emergencia del nuevo movimiento obrero en relación con el cambio de las condiciones para el desarrollo de la conflictividad. Evidentemente este no fue el único factor concurrente en este proceso. Hay como mínimo tres más a tener en cuenta: la generación de una nueva cultura obrera bajo el franquismo, la creación de nuevas redes sociales a partir del fenómeno del desarrollo urbanístico y los procesos migratorios y los cambios acaecidos en la oposición política. Pero en este caso, debido al espacio que tenemos, hemos optado por centrar el análisis solo en uno de estos factores, que es el que activa en una nueva situación al resto. Para el desarrollo argumentado del tránsito de un modelo de conflictividad a otro, vid. Xavier Domènech, *Clase obrera, antifranquismo y cambio político*, La Catarata, Madrid, 2008, pp. 29-138.

dual para acabar con la huelga, los trabajadores retornan a la empresa y esta despidió a los principales organizadores de la conflictividad—. En este marco, las pequeñas mejoras que proporcionaba este modelo de conflictividad garantizaban su reproducción en cortos espacios de tiempo, pero la represión que se abatía sobre los principales activistas de fábrica y la falta de recursos para afrontar una conflictividad sostenida producían una acción colectiva sincopada.⁶ Y si esta era la realidad de las grandes empresas, probablemente será en las medianas y pequeñas donde la nueva implantación del modelo productivista tuvo consecuencias más duras para los trabajadores. Si en las medianas empresas durante el ciclo que va de 1963 a 1966 se produjeron algunos de los conflictos más intensos en cuanto a duración, ya que en ellas la implantación del nuevo modelo suponía una agresión para la que no se tenía respuesta una vez ya consumado, en las pequeñas sus condiciones laborales, al no contar con convenios propios de fábrica, quedaban al albur de la negociación en los sindicatos del régimen, donde no contaban con ninguna representación real.

La percepción de estas limitaciones y su metabolización paulatina entre los activistas llevó a la creación de centros organizativos que superasen el ámbito de la fábrica bajo la forma de Comisiones Obreras. Sus primeras formulaciones nacieron por distintos caminos entre 1962 y 1964, en algunos casos ligadas aún al modelo de negociación anterior dentro de la morfología de la conflictividad por oleada como fue el caso de la Comisión Obrera Provincial de Vizcaya;⁷ en otros vinculados a la penetración de enlaces sindicales de la oposición dentro de la Organización Sindical Española, como fue el caso de la Comisión Obrera del Metal de Madrid⁸ o la Comisión de Vocales, Enlaces, Jurados y Obreros Metalúrgicos de Sevilla;⁹ o bien, finalmente, fuera de las propias estructuras del Sindicato Vertical, como se dio en la creación de la Comisión Obrera de Barcelona.¹⁰ Pero en todo caso la diversidad organizativa en el nacimiento de las nuevas estructuras del movimiento obrero mantenía la característica común de intentar ligar los diferentes problemas de las diversas tipologías de concentración obrera desde una organización que superase el ámbito de fábrica. Así, en un proceso que se inicia en 1963 y llegará a una cierta maduración en las principales concentraciones obreras del país en 1966, estas nuevas fórmulas organizativas permitirán

⁶ Para ver el desarrollo de este modelo en tres ejemplos mencionados: Ignasi Riera i Joan y Botella, *El Baix Llobregat. 15 años de luchas obreras*, Blume, Barcelona, pp. 25-35; Dora Palomero, *Los trabajadores de ENASA durante el franquismo*, Sírius, Barcelona, pp. 112-114; para el caso de la ODAG, *vid.* AHGCB, *Informes laborales, 1967-1968*, caja 274, Carpeta ODAG.

⁷ *Vid.* José Antonio Pérez, *Los años del acero*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, pp. 265-267 y 280-282; Pedro Ibarra, *El movimiento obrero en Vizcaya: 1967-1977*, Bilbao, UPV, 1987, p. 49.

⁸ José Babiano, *Emigrantes, cronómetros y huelgas*, siglo XXI, Madrid, 1995, pp. 237-246.

⁹ Alfonso Martínez Foronda, *La conquista de la libertad. Historia de las comisiones obreras de Andalucía (1962-2000)*, FES/Archivo Histórico de CCOO, Sevilla, 2005, pp. 130-155.

¹⁰ X. Domènech, *Clase obrera, antifranquismo...*, pp. 95-132.

poner en relación las diferentes problemáticas que afrontaba el movimiento obrero.¹¹ Gracias a esta organización, las grandes fábricas empezarán a nutrirse de nuevas solidaridades, en forma de recursos materiales y organizativos, que permitirán mantener el conflicto a lo largo del tiempo a la vez que, en algunas ocasiones, se realizaban paros solidarios que amplificaban el conflicto hasta llegarlo a convertir en un problema de orden público. Pero también las medianas y pequeñas fábricas se beneficiaron de esta nueva morfología de la conflictividad obrera sustentada en las nuevas fórmulas organizativas. Si, por un lado, se adecuaban los ritmos de movilización de las grandes concentraciones obreras, cuando había condiciones para hacerlo, a las negociaciones de los convenios colectivos locales y provinciales que afectaban a la mayor parte de los trabajadores, por otro lado, con la agrupación de recursos organizativos se empezó a plantear, especialmente en el marco de las elecciones sindicales de 1966, la capacidad de infiltración de representantes de los trabajadores dentro de la Organización Sindical Española para poder incidir en la negociación de las condiciones laborales. Proceso que, con interrupciones y fuertes desigualdades regionales, acabó por producir andando el tiempo un modelo de movimiento obrero fuertemente integrado. Este tuvo su espacio privilegiado de actuación y organización en el ámbito local, donde se fomentará esta relación entre las diversas formas de concentración obrera. Pero paralelamente a esta transformación y profundización, a su vez este proceso tuvo profundas consecuencias políticas.

AMPLIANDO EL ÁMBITO DE LO POSIBLE

En una de las primeras reuniones que se realizaron para formar las CC.OO., un joven de 17 años inauguró una asamblea diciendo las siguientes palabras: «que aquello era público, que allí podía ir todo el mundo y que iban a tratarse las cosas de los trabajadores».¹² La afirmación de que el nuevo movimiento era público y que trataría de las cosas de los trabajadores, que en nuestro presente nos puede parecer una obviedad, significaba bajo el franquismo el fin de una oposición planteada solo desde la militancia política clandestina. Si hasta entonces, exceptuando el caso del movimiento estudiantil que en cierto sentido preludeó de forma limitada un proceso que extenderá el movimiento obrero afectando a muchas más realidades,¹³ para oponerse al régimen un militante tenía que adscribirse a una organización

¹¹ Para la historia de estas nuevas formas organizativas: para la historia de las CCOO, *vid.* David Ruiz (dir.), *Historia de Comisiones Obreras (1958-1988)*, Siglo XXI, Madrid, 1993.

¹² AHCONC (Arxiu Històric de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya), Projecte de biografies obreres. Fonts orals i militància sindical (1939-1978). Entrevista a Ginés Fernández Pérez.

¹³ Sergio Rodríguez Tejada, «Estratègies d'oposició i moviment estudiantil antifranquista: una reflexió des del cas valencià», *Recerques*, 44, 2002, pp. 139-172.

política concreta para desarrollar una práctica política básicamente clandestina, ahora la entrada en escena del movimiento obrero, organizado abiertamente en el espacio laboral y público, permitía la interrelación de los diferentes militantes y, lo que devino central, la integración de personas que no necesariamente tenían que militar políticamente, pero que estaban dispuestas a luchar al entorno de demandas concretas. Se abría así el espacio de la militancia hasta hacerlo potencialmente ilimitado. Pero, además, la voluntad de ser un movimiento público implicaba una lucha para redefinir aquello que era posible bajo el régimen franquista. Esta voluntad constante, integrada en la necesidad que tenía el movimiento de ser público si quería triunfar en su principal objetivo de mejorar la vida de los más, implicó en aquellos momentos un nuevo ejercicio de los derechos de reunión, asociación, expresión, manifestación y huelga que, a pesar de la represión, poco a poco se iban ampliando. Un proceso en el que se estableció un desafío básico con el franquismo, el del control del espacio público, en la medida en que la ampliación de estos derechos significaba la misma erosión del régimen en una de sus partes constitutivas: la erradicación de toda forma de disidencia social y política.

En estas nuevas prácticas el movimiento obrero no estaba abriendo tan solo el espacio político, o conquistando espacios de libertad siguiendo la terminología del periodo, para él mismo. De hecho, estaba abriendo también el camino por donde transitarían otros actores, con una base social menos sólida. En su camino, el movimiento obrero ofrecía un repertorio de acciones colectivas ya probadas que podían ser utilizadas por otros, abría el campo de acciones posibles y, también, como en el caso de las primeras movilizaciones de género, juveniles o vecinales, su paso organizativo fuera de la fábrica permitía a estos sectores iniciar una incipiente organización, a partir de las Comisiones Obreras Juveniles, el Movimiento Democrático de Mujeres o las mismas Comisiones Obreras de Barrio, en el mismo seno de la organización obrera en espera de su eclosión como movimientos autónomos ya en los setenta.¹⁴ Pero este no fue un proceso que afectó solo a la emergencia de nuevos movimientos sociales, sino que también permitió, en un primer momento, movilizar recursos de la sociedad civil o del mundo cultural, que si bien no podían iniciar una vía de confrontación con el régimen en estos momentos tan tempranos, sí que podían solidarizarse con los nuevos movimientos sociales, vía manifiestos o actos públicos.

De hecho, la capacidad del movimiento obrero para mantener la doble condición de movimiento social fuertemente integrado y a su vez devenir en el principal sujeto político bajo el régimen franquista —no en vano las CCOO de este

¹⁴ Para este papel del movimiento obrero en relación con otros movimientos sociales en el caso catalán: Xavier Domènech, «La reconstrucció de la raó democràtica», en Carme Molinero y Pere Ysàs (coords.), *Construint la ciutat democràtica. El moviment veïnal durant el tardofranquisme i la transició*, Icaria, Barcelona, 2010, pp. 132-145.

periodo no se definían como un movimiento sindical, sino sociopolítico—¹⁵ fue la clave última que explica su supervivencia. Proceso que se evidenció claramente cuando el régimen inició el intento más completo de terminar con el nuevo fenómeno durante el trienio 1967-1970, a partir de la triada de la ilegalización explícita, tampoco fueron nunca legales, de las CC.OO. en marzo de 1967, la anulación de la negociación colectiva en noviembre de 1967, que fue seguida por la imposición de un tope en la subida salarial del 5,9 % en 1969, y el decreto del Estado de Excepción de enero a marzo de 1969. En este corto espacio de tiempo en el que el movimiento obrero sufrió una gran diversificación organizativa —en parte en forma polémica ante la diversidad de respuestas a la nueva situación, en parte, y de forma relacionada, por las diferentes opciones políticas que actuaban en su seno— y en el repertorio de la acción colectiva entre la centralidad de la lucha en la fábrica, para conseguir romper los corsés salariales y amortiguar la represión, y/o en la calle y los barrios, con nuevas formas de acción para evitar la represión. Mutaciones que fueron acompañadas también por un doble fenómeno relacionado con las características políticas centrales que había desarrollado el nuevo movimiento social: la solidaridad y la sustitución de los militantes caídos. Dos factores profundamente interrelacionados con el cambio que provocó la emergencia del movimiento obrero en la percepción, y las mismas consecuencias, del fenómeno represivo.

El hecho de que el movimiento obrero conformase un movimiento público, no solo lo transformó a él mismo, sino que transformó también las características de la represión en un sentido muy concreto. A partir de su irrupción en el espacio público y con formas de actuación públicas, ya no se detenía, torturaba y se ingresaba en prisión a un militante clandestino cuya actividad concreta era desconocida, a veces incluso hasta para sus allegados, sino que se ejercía la fuerza represiva hacia un compañero de trabajo que había luchado por los derechos de los trabajadores, y con él se reprimía a una lucha colectiva, o a una asistente social que intentaba mejorar las condiciones de vida del barrio, y con ella a las posibilidades de mejorar el espacio vivencial, o a un joven que intentaba crear centros sociales donde vivir una vida mejor, y con él a esa misma posibilidad. Si los nuevos activistas eran públicos y conocidos, la represión era ahora también pública y conocida. Realidad que hizo decantar las actitudes de los tejidos sociales más próximos al movimiento obrero. Ahora, cuando un militante caía en los principales centros del nuevo movimiento obrero, este ya no quedaba desamparado económicamente, gracias a los comités de solidaridad, e incluso en algunas empresas donde el movimiento obrero era especialmente fuerte se le reservaba el sitio de trabajo. A la vez, en las distintas formas organizativas que tomaba el movimiento obrero y en el mismo espacio de la acción colectiva, los militantes

¹⁵ Para una buena definición del sentido sociopolítico de las CC.OO, realizada por sus protagonistas, *vid.* «Debat. CC.OO. 1968-1969: repressió i crisi», p. 135, *Quaderns*, Barcelona, 1981, pp. 111-112.

apresados eran sustituidos por nuevos que llegaban a primera línea en un proceso de decantación de actitudes que cada vez afectaba a sectores sociales más diversos. Así, si antes de un Primero de Mayo la policía desarticulaba a sus principales organizadores, se podía encontrar con la sorpresa de que los curas de la ciudad tomaban su relevo, o bien que cuando desarticulaba una coordinadora local de las CC.OO., esta era reconstruida rápidamente por militantes jóvenes, a veces extremadamente jóvenes.¹⁶ Fenómeno que en última instancia garantizó la misma supervivencia del movimiento obrero, a pesar de que en algunos lugares la represión consiguió cortocircuitarlo por un tiempo,¹⁷ produciendo una relación nueva entre la militancia política, social y el tejido civil. De hecho, la misma aparición del movimiento creó un nuevo sujeto entre el régimen y la oposición antifranquista que cambiaba completamente su relación táctica y estratégica; y en lo que se refiere a su capacidad para superar el fenómeno represivo, lo cierto es que las caídas constantes de los principales centros políticos, propias de los cincuenta y principios de los sesenta, ahora se fueron espaciando al concentrarse el régimen en la desarticulación del movimiento social, permitiendo, a su vez, la estabilización de las organizaciones políticas clandestinas que regeneraban a los movimientos sociales cuando estos eran golpeados por la represión.¹⁸

En este nuevo marco, donde el sujeto político se construía desde las realidades y necesidades del sujeto social generando una realidad completamente nueva, el movimiento obrero sobrevivió y se estabilizó como fenómeno bajo el franquismo y ya entrados en la década de los setenta se extendió y pluralizó en su realidad, afectando a franjas cada vez más amplias territorialmente y sectorialmente. Proceso en el que la red de solidaridades que tejió el movimiento obrero con el resto de movimientos sociales y con una sociedad alternativa a la oficial, se constituyó en uno de los polos centrales del antifranquismo. Esta red se articulaba al entorno de círculos concéntricos de solidaridad y capacidad de respuesta que iba de las fábricas referentes a las pequeñas y medianas plantillas; del movimiento obrero al resto de movimientos sociales, especialmente en este caso el vecinal; y, finalmente, de los movimientos sociales a un tejido social emergente conformado por entidades y personas comprometidas. Y es precisamente en este último proceso de articulación de una sociedad civil antifranquista donde encontramos la genética de la relación entre movimientos sociales, la acción colectiva y el cambio político que de forma soterrada, pero profunda, se estaba produciendo en los primeros setenta. Los movimientos sociales generaban espacios de libertad, objetivos comunes para la oposición y programas alternativos de sociedad, la sociedad civil

¹⁶ Vid. Xavier Domènech, *Quan el carrer va deixar de ser seu. Moviment obrer, societat civil i canvi polític. Sabadell (1966-1976)*, Abadía de Montserrat, Barcelona, 2002, pp. 99-120.

¹⁷ Vid. Alberto Gómez Roda, *Comisiones Obreras i repressió franquista*, PUV, Valencia, 2004.

¹⁸ Vid. Xavier Domènech, «El partit dels moviments: tres moments d'una relació», en: Gaiame Pala (ed.), *El PSU de Catalunya, 70 anys de lluita pel socialisme*, ACIM, Barcelona, 2008, pp. 207-243.

relacionada con estos movimientos metabolizaba y amplificaba estos planteamientos, creando una cultura alternativa a la oficial, que se extendía por diferentes sectores sociales y, finalmente, el poder político se veía obligado en los principales centros industriales del país a abandonar los espacios sociales para recluirse detrás del control social que le garantizaba una represión que precisamente, por este mismo proceso, cada vez era más descarnada hacia el final de la Dictadura. Era una lucha por el control del espacio público en términos de hegemonía social, cultural y, finalmente, política. El campo de batalla se encontraba precisamente en los vasos comunicantes que toda sociedad compleja establece y su corazón principal residía en los movimientos sociales.¹⁹ Pero fue con el «hecho biológico» (la muerte de Franco) cuando los ritmos de la dinámica social, cultural y política, que en la historia siguen tiempos diferentes, y veces alejados, se ensamblaron en un solo espacio temporal. Si las bases de la relación entre movimientos sociales y cambio político se gestaron en los años sesenta a partir de los cambios que metabolizaron, generando respuestas específicas, activistas del movimiento obrero, que a su vez generaron profundas transformaciones en las formas y posibilidades de la acción política, fue en ese momento, a partir de finales de 1975, cuando se pusieron en juego todos los recursos de la oposición antifranquista y entre ellos los del propio movimiento obrero.

UN MOVIMIENTO EN TIEMPOS DE CAMBIO POLÍTICO

Con la muerte del dictador la lucha por el espacio público tomaba ahora una nueva dimensión. Manuel Fraga Iribarne, en aquellos momentos ministro de Gobernación de la Dictadura, lo situó con claridad con su afirmación «la calle es mía». Y ciertamente, en un momento de fuerte desorientación política para el régimen, saber de quién era la calle, en un país donde no existían mecanismos para saber lo que pensaba realmente la población, devenía en un plebiscito virtual. En este contexto, el desafío de Fraga se dirimió durante el primer semestre de 1976. En este espacio temporal, la conflictividad obrera se disparó a partir de noviembre de 1975 y si durante ese año medio millón de trabajadores habían perdido 10 millones de horas de trabajo en conflicto, en 1976 esta cifra alcanzó a 3,5 millones de trabajadores, que perdieron 110 millones de horas de trabajo. España se situó a la cabeza de la conflictividad europea.

Esta «batalla de la calle», tal como fue definida por el Gobernador Civil de Barcelona en esos momentos, fue encabezada por la provincia de Barcelona, las tres del

¹⁹ Para ver dos estudios de caso sobre este proceso en dos realidades completamente diferentes y, por tanto, también con una intensidad diversa: Xavier Domènech, *Quan el carrer va deixar de ser seu. Moviment obrer, societat civil i canvi polític. Sabadell (1966-1976)*, Abadia de Montserrat, Barcelona, 2002; Oscar Martín García, *A tientas con la democràcia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977*, La Catarata, Madrid, 2008.

País Vasco, Navarra, Madrid y Asturias, pero iba mucho más allá de ellas, afectando a prácticamente toda la geografía urbana del país. En el norte de España la movilización obrera tendrá su momento álgido en marzo, a partir de las huelgas en solidaridad con los hechos acaecidos en Vitoria, cuando 150.000 trabajadores entren en huelga en Vizcaya, 150.000 más en Guipúzcoa y se paralice Navarra, donde se vivieron durante cuatro días fuertes enfrentamientos en Pamplona.²⁰ Pero si la movilización por los hechos de Vitoria se mostró como un catalizador de la conflictividad, lo cierto es que cada provincia siguió sus propios ritmos en la marea de conflictividad de 1976. En Vizcaya el momento álgido de la misma, en unos años donde en esa provincia se produjeron trece huelgas generales, se registró durante la gran huelga general del 27 septiembre.²¹ En Navarra la lucha se había iniciado ya a principios de año por el Convenio Provincial de Navarra, superando el ámbito de la lucha en la empresa y sectorial para tratar de unificar todos los intereses dispersos del conjunto de la clase, movilizándolo a 35.000 personas el 22 de febrero de 1976. Transversalmente a la lucha por el convenio, habrá una constante movilización por la amnistía que produjo la paralización total de Pamplona y la zona norte de Navarra también el 27 de septiembre donde ya antes, en esta política de ocupar el espacio público, se habían manifestado 10.000 personas durante los Sanfermines.²² En aquellos mismos momentos Asturias se incorporaba de nuevo, después de años de conflictos amortiguados, a la delantera de la conflictividad con las huelgas de las empresas metalúrgicas Duro-Falguera y Endesa que llevaron a la paralización total de Avilés, y con la nueva conflictividad generada en Hunosa después de años de retroceso. Realidad que llevó, además, a una manifestación de 20.000 personas el 15 de julio por la amnistía.²³ Galicia tampoco era ajena a esta situación, concentrándose la agitación en las huelgas de la construcción y el metal en Vigo y A Coruña y el intenso conflicto vivido durante todo el año en Astano del Ferrol.²⁴

Durante ese espacio de tiempo en la capital del estado, sin declararse una huelga general abierta en enero de 1976 la ciudad estuvo paralizada por la agregación de hasta 300.000 huelguistas de diversos sectores.²⁵ Mientras tanto, en la otra gran metrópoli del estado, y capital de la conflictividad en los últimos años del franquismo,

²⁰ Vid. Pedro Ibarra, *El movimiento obrero en Vizcaya: 1967-1977*, UPV, Bilbao, 1987, p. 522; Mariano Guindal y Juan H., Jiménez, *El libro negro de Vitoria*, Ediciones 99, Madrid, 1976, p. 104; José Iriarte, *Movimiento obrero en Navarra (1967-1977)*, Gobierno de Navarra, Pamplona, 1995, pp. 283-284. Para la huelga de Vitoria: Carlos Carnicero, *La ciudad donde nunca pasa nada. Vitoria, 3 de marzo de 1976*, Gobierno Vasco, Vitoria, 2007.

²¹ P. Ibarra, P., *El movimiento obrero en Vizcaya...*, p. 495-500.

²² J. Iriarte, *Movimiento obrero en Navarra...*, pp. 275-287.

²³ D. Ruiz (dir.), *Historia de Comisiones...*, pp. 179-182.

²⁴ *Ibid.*, p. 284. También: José Gómez y Víctor Santidrián, *Historia de comisiones obreras de Galicia nos seus documentos*, Edicions do Castro, A Coruña, 1996, pp. 309-387.

²⁵ VV.AA., *Madrid en huelga. Enero de 1976*, Ayuso, Madrid, 1976.

Barcelona, las huelgas del sector servicios se extendieron a la vez que la conflictividad de fábrica crecía exponencialmente.²⁶ Finalmente, el gran ciclo movilizador del año 1976 afectó casi a toda España, en muchos lugares significó la emergencia por primera vez del conflicto laboral abierto y se incorporaron sectores a la conflictividad insospechados hasta entonces. Pero hubo dentro de estas movilizaciones conflictos más o menos aislados con un carácter cualitativamente diferente al resto. Huelgas generales políticas locales o regionales que contuvieron, y aportaron en esos momentos, elementos de ruptura política con el viejo régimen, introduciendo nuevas variantes en el año decisivo del cambio político. La huelga general del Baix Llobregat en enero de 1976, la de Sabadell en febrero de 1976, la de Vitoria en marzo o la de Córdoba, fueron en este sentido la parte más visible, a pesar de ser fenómenos localizados, de un proceso que mostraba la imposibilidad de abordar un futuro fuera de las demandas expresadas en la calle en caso de no producirse cambios políticos sustanciales.²⁷

De hecho, la movilización obrera del primer semestre de 1976 consiguió a finales de ese año hacer caer el primer gobierno de la monarquía, que operaba en el marco del franquismo, y condicionar la agenda política de su segundo gobierno, formado en junio de 1976, a partir de la asunción de las demandas ineludibles de la primera amnistía y la aceptación de una concurrencia electoral pluripartidista.²⁸ Fue en este sentido la acción de los movimientos sociales, y entre ellos especialmente del movimiento obrero, la que llevó a la democratización final del país. Ciertamente esta movilización, por amplia y profunda que fuese, no llevó a la caída del régimen, en este sentido el mantenimiento de la fidelidad de los aparatos de coerción hacia el régimen fue clave, pero tampoco este podía sobrevivir, por muchas reformas que se realizasen al edificio, sin controlar la conflictividad que se estaba desplegando en zonas enteras como Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Madrid o Cataluña. En este contexto cualquier alternativa política, viniese del régimen o de la oposición, que se quisiera viable tenía que tener en cuenta la siguiente realidad: tan solo asumiendo las principales reivindicaciones políticas expresadas en la calle se podía garantizar la supervivencia política y económica de las principales élites del país, a pesar de que ello significase la transformación absoluta del régimen político y con ello de la Dictadura. Y esta es la realidad que finalmente se impuso.

²⁶ Sebastian Balfour, *La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988)*, Ed. Alfons el Magnànim, Valencia, 1994, p. 234.

²⁷ Rafael Morales, *Transición política y conflicto social. La huelga en la construcción de Córdoba en 1976*, Ediciones de La Posada, Córdoba, 1999; José Botella e Ignasi Riera, *El Baix Llobregat: 15 años de luchas obreras*, Blume, Barcelona, 1976; C. Carnicero, *La ciudad donde nunca pasa nada...*

²⁸ Aunque esta concurrencia tuvo límites cuando se produjo la contienda electoral del 15 de junio de 1977, si por un lado el PCE no fue legalizado hasta abril de 1977, y significativamente el PSUC que era la principal fuerza comunista en España hasta mayo, a los partidos que en sus siglas llevasen una mención republicana no les fue permitido concurrir en el proceso electoral.